

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **PASTOR CAICEDO MURILLO**
Demandados : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.**
Radicado : **05001 31 05 019 2013 01540 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común -.
Decisión : Modifica decisión condenatoria de Primera Instancia
Sentencia No : 158

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 *“por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción ordinaria Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se **declare** la nulidad de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por el Instituto de Seguros Sociales y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; que el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y fecha de estructura el 19 de julio de 1999; se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común, retroactivo pensional, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación, costas procesales, condenas ultra y extra petita.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el demandante se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida desde el 10 de febrero de 1983, cotizó 675.86 semanas del 10 de febrero de 1983 al 3 de junio de 2005; fue calificado por el I.S.S. el 15 de octubre de 2009, asignándole el 75.50% de pérdida de capacidad laboral (PCL), estructurada el 27 de septiembre de 2008; la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió dictamen el 13 de abril de 2010, con PCL del 58.63% y fecha de estructuración el 29 de septiembre de 1999; la Junta Nacional de Calificación de Invalidez lo calificó el 26 de enero de 2011, le asignó el 75.50% de PCL con estructuración el 27 de septiembre de 2008. El demandante acudió ante el médico laboral Jaime Alberto Álvarez Tobón quien el 30 de mayo de 2012, emitió dictamen con el 73.8% de PCL y fecha de estructuración el 19 de julio de 1999, fecha para la cual era cotizante activo. Reclamó pensión de invalidez el 12 de agosto de 2013, sin que a la fecha de presentación de la demanda se le brindara alguna respuesta.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES a través de apoderada judicial, aceptó lo referente al dictamen practicado al demandante por médico particular. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones denominadas ausencia de causa para pedir, prescripción, improcedencia de indexación, imposibilidad de condena en costas.

La **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** a través de apoderado, expuso que emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral conforme al procedimiento legal y a los sustentos de hecho y de derecho establecidos en la normatividad aplicable, con apego a las pruebas obrantes en la carpeta al momento de la calificación; afirma que un perito particular, remunerado por el demandante, carece de imparcialidad y no está autorizado para emitir conceptos vinculantes en materia de calificación de invalidez. Propuso en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones, prescripción.

Por su parte, la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** a través de apoderada, expuso que los órganos competentes para conocer las controversias contra los conceptos emitidos por las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y calificar el origen de las contingencias, son las Juntas de Calificación de Invalidez, aplicando los criterios técnicos del Manual Único de Calificación; no siendo procedente modificar la calificación con el documento elaborado por el Médico Jaime Alberto Álvarez Tobón, ya que como médico particular no tiene facultad, autorización o competencia para conceptuar sobre el asunto. Propuso en su defensa las excepciones denominadas

legalidad de la calificación, inexistencia de prueba idónea, improcedencia jurídica del documento elaborado por médico particular, inexistencia de la obligación, buena fe, genérica.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Diecinueve Laboral** del Circuito de Medellín, declaró la nulidad de los dictámenes emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; **condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar** al demandante la **pensión de invalidez de origen común**, con **retroactivo pensional** en cuantía de **\$120.922.700** causado **entre el 19 de julio de 1999 y el 31 de enero de 2017**; continuar pagando la mesada pensional a partir del 1º de febrero de 2016 por valor de \$737.717, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, sin perjuicio de los incrementos legales, mientras persistan las causas que le dieron origen; indexación sobre el retroactivo pensional reconocido. Costas a cargo de COLPENSIONES, agencias en derecho equivalentes al 15% del valor de las condenas a favor del demandante.

Recurso de Apelación apoderado del demandante:

En cuanto absolvió de la pretensión de intereses moratorios, ya que desde el año 2009 el I.S.S. determinó que el demandante era inválido y se estuvo en desacuerdo con la fecha de estructuración, concluyéndose por la Junta Regional que es inválido desde 1999, siendo la misma entidad de seguridad social quien interpuso recurso contra ese dictamen, razón por la cual la Junta Nacional lo modificó; reclamándose la pensión desde el 12 de agosto de 2013 y de no ser por ese recurso, se habría reconocido la prestación desde la fecha en que hubiera quedado

en firme el dictamen de la Junta Regional; aduce que la entidad de seguridad ha incurrido en mora, lo que conlleva a que el afiliado sufra perjuicios, pues salió del campo laboral desde el año 1999.

Recurso de Apelación apoderado de COLPENSIONES:

Se opone a la condena al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, ya que, tratándose de la nulidad de dos dictámenes periciales, las entidades encargadas son el I.S.S. y las Juntas de Calificación de Invalidez, elegidas mediante concurso de mérito, responden a un mínimo de experiencia y experticia, cuentan con capacidad para esta labor, sin que pueda entenderse que un particular con interés en el resultado, determine el convencimiento sobre la fecha de estructuración de la invalidez; atendiendo al principio de la sana crítica y valoración probatoria, deberá darse plena validez a los dictámenes del I.S.S. y la Junta Nacional, teniendo como fecha de estructuración el 27 de septiembre de 2008, sin que el afiliado contara con el mínimo de semanas cotizadas, debiéndose absolver de las pretensiones.

Alegatos de conclusión:

Los apoderados del demandante y COLPENSIONES reiteraron argumentos expuestos al sustentar el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación** y se conocerá en **Consulta** en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y Providencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia AL2912 del 11 de julio de 2018 Radicación 68716, AL469 del 3 de febrero de 2016 Radicado 71896, STL-7382 del 9 de junio de 2015 Radicado 40200, M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si hay lugar a tomar como fecha de estructuración de la invalidez del demandante, la definida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez -27 de septiembre de 2008- o la indicada por el Médico Laboral Jaime Alberto Álvarez Tobón -19 de julio de 1999- y dependiendo de ello, si cumple con la densidad de semanas para tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común; en caso de mantenerse la decisión, se constatará si hay lugar a intereses moratorios. En favor de COLPENSIONES se revisará en Consulta las demás condenas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, modificar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Normatividad y jurisprudencia aplicables:

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo **142 del Decreto 019 de 2012, establece que corresponde al Instituto de Seguros Sociales**, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP hoy ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, **determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose controvertir ante las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional y nacional;** indicando expresamente que **contra dichas decisiones, proceden las acciones legales.**

Sobre la **contradicción del dictamen de pérdida de capacidad laboral**, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL1044 de 2019 Radicación 68074, reiterando CSJ SL5280-2018 y CSJ SL16374-2015, **indicó que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es prueba solemne**, de modo que **puede ser controvertido ante los Jueces del Trabajo**, sin que sea un requisito de procedibilidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez realizar el trámite ante dichas Juntas, ya que **la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, donde puede solicitar una nueva valoración**, para que sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada; veamos:

“...la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la

condición incapacitante establecida por aquellas.

(...)

Así las cosas, el ejercicio de los recursos previstos en el decreto en cita contra los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, no es el único medio con que cuenta la parte contra la cual se pretenda hacer valer, para oponerse y disentir de su contenido, puesto que también puede controvertirlo ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, puede hacer uso de la solicitud de una nueva valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada...”.

En **Sentencia SL877 de 2020**, señaló que **los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, son prueba, no solemne**, con los cuales se puede acreditar el grado de la pérdida de capacidad laboral, su origen y fecha de estructuración, pero que al no exigir la ley determinado elemento de persuasión para acreditar la pérdida de capacidad laboral, **debe respetarse la libertad probatoria de la que están asistidos los juzgadores de instancia**; explicando que **si el Juez**, para definir una determinada controversia, **se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad**, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste, de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Sobre lo que es objeto de apelación tenemos que:

El apoderado de COLPENSIONES se opone a la condena impuesta a reconocer y pagar pensión de invalidez al demandante, afirmando en términos generales, que *no es viable darle valor probatorio a la calificación emitida por el Médico Laboral Jaime Alberto Álvarez Tobón, debiéndose acoger la fecha de estructuración definida por las entidades encargadas como el I.S.S. y la Nacional de Calificación de Invalidez.*

En el **asunto bajo** estudio está acreditado que, el señor Pastor Caicedo Murillo fue calificado por el Instituto de Seguros el

15 de octubre de 2009, asignándole el 75.50% de PCL con fecha de estructuración el 27 de septiembre de 2008 (folio 10); la Junta Regional de Calificación emitió dictamen el 13 de abril de 2010, registrando el 58.63 de PCL estructurada el 20 de septiembre de 1999 (folios 11 y 12); por su parte, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al resolver el recurso de apelación interpuesto por el I.S.S., dictaminó el 26 de enero de 2011, que el demandante cuenta con 75.50% de PCL estructurada el 27 de septiembre de 2008 cuando se documenta hemiparesia, secuela que altera de forma importante el desempeño del paciente y lo invalida (folios 16 a 19).

Para imponer condena, **la a quo explicó en términos generales**, que le merecía pleno valor probatorio el dictamen presentado por el doctor Jaime Alberto Álvarez Tobón, según el cual, la invalidez del demandante se estructuró el 19 de julio de 1999, fecha que se relaciona con la determinada por la Junta Regional, sin que exista razón para desestimarlos, siendo un estudio correcto, bajo los parámetros de la norma, al rendir su declaración mostró pericia, conocimientos y experiencia.

Esta Sala de Decisión Laboral no desconoce que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ante la existencia de múltiples dictámenes de pérdida de capacidad laboral, como ocurre en este caso, el Juez Laboral está habilitado para sustentar su decisión, en aquél que le merezca mayor credibilidad, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste; tal como lo explicó la Juez de Primera Instancia, al acoger plenamente las conclusiones del informe presentado por el Médico Laboral Jaime Alberto Álvarez Tobón, como sustento para acceder a las pretensiones de la demanda; según el cual, el demandante cuenta con 73.8 de PCL estructurada el 19 de julio de 1999, afirmándose

allí que “... desde el momento de la ocurrencia del primer evento vascular ya presentaba una pérdida de capacidad laboral superior a 50% ... ya presentaba ... secuelas de enfermedad neurológica secundaria posiblemente a la crisis hipertensiva con compromiso motor de extremidades y afasia ...” (folio 26).

Sobre el tema objeto de controversia, el Órgano de Cierre de la especialidad Laboral en Sentencia SL2349-2021 reiterando SL3992-2019, recordó que en la tarea de verificar el origen de la enfermedad, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral “...**el juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones...**” (Negritas fuera de texto).

Así mismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 232 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, conforme al cual, “...**El juez apreciará el dictamen** de acuerdo con las reglas de la sana crítica, **teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos**, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso...” (Negritas fuera de texto).

Ante lo anterior, previo a emitir decisión de fondo, esta Judicatura decretó como **prueba de oficio**, emitir dictamen médico laboral por el Centro de Estudios en Derecho y Salud CENDES de la Universidad CES, para que se determinara la pérdida de capacidad laboral del demandante y la fecha de estructuración de la invalidez, teniendo en cuenta toda la información obrante en el expediente y los dictámenes existentes;

a cargo de la parte actora (folio 351)¹.

La Universidad CES allegó el dictamen emitido el día 23 de junio de 2022, elaborado por el doctor José Manuel Méndez Carballo, Médico y Cirujano de la Universidad de Cartagena, Especialista en Salud Ocupacional de la Universidad de Antioquia, Especialista en Valoración del Daño Corporal de la Universidad CES, Magister en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Docente Universitario de Posgrado y Perito del Centro de Estudios en Derecho y Salud CENDES de la Universidad CES. En dicho dictamen, el demandante fue calificado con el **78.1% de pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración el 27 de septiembre de 2008 “Fecha en que se describe su hemiparesia franca y permanente”** (archivo 24 carpeta 02).

Por la relevancia del concepto emitido en el dictamen de la Universidad CES, se transcriben a continuación los apartes pertinentes, sobre la **justificación del profesional en Salud Ocupacional para definir la fecha de estructuración de la invalidez en el año 2008**, descartando que sea viable definirla en el año 1999 cuando el demandante presentó el primer episodio cerebrovascular, ya que para esa época ***el neurólogo conceptúa que presenta leve paresia en extremidades izquierdas y que las secuelas son mínimas***, además que ***No hay ningún otro elemento en la historia clínica aportado que permita evidenciar una condición clínica diferente, razón por la cual no hay argumentos para estructurar su invalidez en 1999***; veamos:

“...Con relación a la fecha de Estructuración de la Invalidez, la historia clínica se convierte en el principal soporte, con todos los elementos que la constituyen y con una evolución documentada de la enfermedad, siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Decreto 1507 de 2014 y la Directriz 001 del 1/08/2014 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

¹ Posteriormente, atendiendo a lo manifestado por el apoderado del demandante Pastor Caicedo Murillo respecto a la grave situación económica de éste, lo cual fue constatado con la prueba documental allegada, se modificó la prueba de oficio decretada, ordenándose a COLPENSIONES cancelar el valor los honorarios (archivo 01 carpeta 02).

Con relación a su primer evento cerebrovascular del 10/07/1999, la Historia Clínica anexada, contiene dos evaluaciones por Neurología, la primera del 27/07/1999, en la que se anota una afectación del nervio facial central izquierdo y una hemiparesia izquierda, con fuerza segmentaria de 4/5, ordenando exámenes (Tomografía Axial Computarizada - TAC de cráneo, Ecodúplex carotideo y otros).

El 29/09/1999, con los resultados de los exámenes, el neurólogo conceptúa que presenta leve paresia en extremidades izquierdas y que las secuelas son mínimas, lo cual está en contra de lo expuesto por el trabajador, en el sentido que su condición clínica actual se estructuró con el primer evento.

No hay ningún otro elemento en la historia clínica aportado que permita evidenciar una condición clínica diferente, razón por la cual no hay argumentos para estructurar su invalidez en 1999.

El 26/03/2002, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia solicita Evaluación Neuropsicológica para la calificación, la cual solo se vino a realizar en Julio de 2009, posterior a su segundo evento ocurrido el 27/09/2008, donde se objetiva su trastorno cognitivo.

En la historia clínica existe evidencia de la nota médica del 27/09/2008, en la que se describe una desviación de la comisura labial hacia la derecha y una hemiparesia izquierda, las cuales persisten en el tiempo, según las notas de evolución, a lo cual se suma el deterioro cognitivo, evidenciado en la evaluación neuropsicológica de julio de 2009, siendo esta el soporte y justificación de la fecha de estructuración de la invalidez, calificada en el actual peritaje...”
(Negritas fuera de texto).

Del anterior dictamen se corrió traslado mediante Auto del 28 de junio de 2022, allegándose pronunciamiento por el apoderado del demandante, solicitando no acoger el dictamen del CES y en su lugar, se tenga en cuenta el emitido por el doctor Jaime Álvarez o el de la Junta Regional (archivos 25 a 27).

Observándose que el dictamen de la Universidad CES, es coincidente con la información relevante tenida en cuenta por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para fijar la fecha de estructuración de la invalidez del demandante igualmente el día 27 de septiembre de 2008, explicando que “... antes de esta fecha el paciente no tuvo criterios para ser declarado inválido (secuelas permanentes y definitivas), no siendo válido el ejercicio hecho por la Junta Regional en la que se intentaba sustentar la invalidez en el año 1999, pues no se corresponde con la deficiencia dada en la respuesta del recurso, toda vez que para la asignación del porcentaje de 22.4% de hipertensión arterial no es suficiente con que se detecten secuelas de AVC mínimas sino que también se deben cumplir otros requisitos como lo son cifras tensionales diastólicas repetidamente mayor de 90 mm Hg, las alteración

de los sedimentos urinarios y el compromiso visual por la hipertensión arterial. En este ejercicio también se sobrevalora la secuela de EVC isquémico en hemicuerpo izquierdo ... Por el contrario, para el año 2008 ya se documenta una hemiparesia, secuela esta que sí altera de forma importante el desempeño del paciente y lo invalida...” (folio 17).

De acuerdo a lo anterior, conforme a la libre formación del convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias particulares del asunto planteado, **encuentra esta Sala de Decisión Laboral razonable, acoger como fecha de estructuración de la invalidez del demandante, la definida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el día 27 de septiembre de 2008**, siendo ésta una evaluación emitida por **entidad especializada** en el tema de Salud Ocupacional y calificación de merma de la capacidad laboral, **facultada legalmente para ello conforme al 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, de reconocida trayectoria e idoneidad; dictamen que ofrece suficiente credibilidad, donde se explica de manera detallada la evolución clínica del paciente y la relación de documentos, exámenes y ayudas diagnósticas tenidos en cuenta, con base en historia clínica emitida por los diferentes especialistas que atendieron al paciente; fecha que coincide con la determinada en el dictamen decretado como prueba de oficio por parte del Centro de Estudios en Derecho y Salude CENDES de la Universidad CES.

Sin que el informe presentado por el Médico Laboral Jaime Alberto Álvarez Tobón de fecha 30 de mayo de 2012, ofrezca suficiente credibilidad y razones fehacientes para dejar sin efectos el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la autoridad facultada legalmente para ello; lo anterior, teniéndose en cuenta que el Médico particular conceptuó que desde “...la

ocurrencia del primer evento vascular ya presentaba una pérdida de capacidad laboral superior a 50% ... presentaba ... secuelas de enfermedad neurológica secundaria posiblemente a la crisis hipertensiva con compromiso motor de extremidades y afasia..." (folio 26), sin que se aporte prueba técnica para ello; contrario a lo indicado por la Junta Nacional, fundamentado en **concepto de Neurología de fecha 29 de septiembre de 1999** cercana al primer evento vascular ocurrido el 18 de julio de eso año-, donde el neurólogo conceptuó que presenta **leve paresia en extremidades izquierdas y que las secuelas son mínimas**; lo que coincide con **dictamen del I.S.S. de fecha 16 de junio de 2000**, donde se asignó el **23.90% de PCL** registrando que **con el primer evento neurología describe "... solo secuelas mínimas de tipo neurológico y de tipo motor nunca de tipo cognitivo..."** (folio 10)

No habiendo lugar a reconocer la pensión de invalidez en aplicación de la Ley 860 de 2003 vigente para la fecha de estructuración de la invalidez en el año 2008, ya que no cuenta con semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores, entre el 27 de septiembre de 2005 y el mismo día y mes de 2008, pues la última cotización data del 30 de junio de 2005 (folio 53).

Se analiza si el demandante cumple condiciones para acceder a la pensión de invalidez en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, aplicando artículo 39 de la Ley 100 de 1993 original:

La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, tiene precisado que no necesariamente debe someterse a las calificaciones que de los hechos hagan las partes o a las disposiciones legales que éstas invoquen, pues el convocado a interpretar y aplicar la Ley es el Juzgador a partir de los hechos

acreditados, subsumiéndolos en la norma que consagra el derecho en discusión; al respecto ver Sentencias SL 1083 del 12 de abril de 2018 Radicado 54445, SL 20752 del 6 de diciembre de 2017 Radicado 58774, SL 6400 del 21 de abril de 2016 Radicado 42776.

El demandante no cumple las condiciones exigidas por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, fijando como criterio que solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia (SL2358 de 2017, reiterada en SL5657 de 2021) y en este caso, la estructuración de la invalidez se dio en el año 2008, por fuera del límite temporal fijado por el Órgano de Cierre de esta especialidad.

Para el 27 de septiembre de 2008 no era cotizante activo y no cuenta con 26 semanas cotizadas en el año anterior y tampoco en entre el 26 de diciembre de 2002 y mismo día y mes del año 2003, cuando se dio el tránsito legislativo.

Condición más beneficiosa con salto normativo para acudir al Decreto 758 de 1990:

Para la fecha en que se promovió la demanda y cuando se profirió la Sentencia de Primera Instancia, la H. Corte Constitucional permitía por condición más beneficiosa, el salto normativo, para personas que por ejemplo en vigencia de la Ley 860 de 2003, hubieren estructurado la pérdida de capacidad laboral que le diera la condición de inválidos, aplicando el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año,

si cumplían los requisitos allí establecidos, sin exigir ningún otro condicionamiento.

En el transcurso del proceso, **la H. Corte Constitucional mediante Sentencia SU 556 del 20 de noviembre de 2019, ajustó el alcance del principio de la condición más beneficiosa en pensiones de invalidez**, indicando que la regla fijada en la Sentencia SU-442 de 2016, según la cual este principio da lugar a que se apliquen de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a aquellos afiliados cuya invalidez se hubiese estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, solo es aplicable a personas en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellos que superen las exigencias del siguiente “*test de procedencia*”:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
Segunda condición	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez.
Cuarta condición	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Conforme a las **Sentencias SU 068 de 2018, SU 354 de 2017, SU 406 de 2016 de la H. Corte Constitucional, el precedente vertical tiene carácter vinculante para los operadores judiciales, de manera general e inmediata**, siendo prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general, buscando con ello materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la confianza

legítima, mandatos que obligan a que los Jueces tengan en cuenta tales decisiones, al decidir los asuntos sometidos a su competencia.

Encontrándonos con que, de acuerdo a la prueba obrante en el expediente, el demandante cumple los requisitos establecidos en estas reglas, así:

Cumple con la primera condición, ya que el señor Pastor Caicedo Murillo, además de **ser persona en situación de invalidez**; está ubicado en el **grupo de “vejez”**, ya cuenta con **65 años de edad**, al haber nacido el 24 de diciembre de 1956 (folio 68); presenta también delicado estado de salud, pues conforme al dictamen médico laboral más reciente del CENDES, se valoraron deficiencias por *hipertensión arterial con daño en órgano blanco (cerebro), trastorno cognitivo clase 2, paresia del miembro superior izquierdo*, se apoya en bastón para caminar, asiste a terapias de rehabilitación para mejorar movilidad, requiere uso de pañales, necesita ayuda para actividades como vestirse, subir escalas, comer, manejo de medicamentos (archivo 24); consultado el Registro Único de Afiliados del Sistema Integral de Información de la Protección Social, base de datos que es de acceso público, se encontró que el demandante aparece afiliado al Sistema de Salud en Savia Salud EPS a través del régimen subsidiado desde el 24 de febrero de 2015, como “*cabeza de familia*” (Archivo 29), de donde se infiere que es persona de escasos recursos económicos; tratándose de persona que **goza de especial protección constitucional**, según lo señalado en el artículo 13 de la Constitución Política, conforme al cual el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

Acredita la segunda condición: puesto que, con la prueba obrante, puede inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez, afecta la satisfacción de las necesidades básicas del demandante, como el mínimo vital y la vida en condiciones dignas, ya que se trata de persona sin capacidad física para laborar, sin ingresos propios que le permitan una estabilidad económica. Para ello, puede verificarse que en los fundamentos del **dictamen médico** para calificación de la pérdida de la capacidad laboral emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, **quedó registrado que su ocupación laboral era como Docente** y se encuentra desempleado desde el año 1999, época en la que sufrió el primer evento de accidente cerebro vascular (folio 18); de acuerdo al dictamen elaborado por el CENDES requiere apoyo para “*vestirse requiere ayuda para algunas actividades como colocarse los pantaloncillos, sudadera y medias ... Para caminar se ayuda con el bastón y pegado de las paredes, pero en la calle requiere de la ayuda de tercera persona...*” y no realiza participación en grupos, contactos sociales, viajes (archivo 24).

Supera también la tercera condición, al advertirse que la imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por la disposición vigente al momento de la estructuración de la invalidez, pudo obedecer a situaciones objetivas y razonables; teniendo en cuenta que se trata de una **persona que desempeñaba su oficio como Docente y las limitaciones físicas a las que se ha visto sometido en razón del accidente cerebro vascular,** le impidieron continuar ejerciendo tales actividades, de las cuales devengaba los ingresos para su sustento y efectuar los aportes al Sistema de Pensiones.

Por último, **como cuarta condición, se observa actuación diligente** del demandante, en el agotamiento de los

recursos tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, atendiendo a que acudió a valoración ante el I.S.S. en octubre de 2009 (folio 10), esto es, fecha cercana al segundo evento vascular que según los dictámenes le causó la invalidez estructurada el día 27 de septiembre de 2008 y en adelante, acudió ante las Juntas Regional y Nacional solicitando la revisión del dictamen, los días 13 de abril de 2010 y 26 de enero de 2011, respectivamente (folios 10 a 19).

Al cumplir las cuatro (4) exigencias del *test de procedencia*, se procede a verificar el cumplimiento del requisito de semanas conforme al Decreto 758 de 1990, en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, con salto normativo, como lo permite la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional.

Encontrándose que conforme a la única historia laboral obrante en el expediente generada por el I.S.S., **el señor Caicedo Murillo acredita 675.86 semanas cotizadas** entre el 10 de febrero de 1983 y el 30 de junio de 2005, **de las cuales, 404 fueron cotizadas en vigencia el Acuerdo 049 de 1990**, cumpliendo con lo exigido en el artículo 6° del Decreto 758 de 1990, que exige haber cotizado para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **modificar** la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, **revocándose** en cuanto condenó al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 19 de julio de 1999, en aplicación del artículo 39 original de la Ley 100 de 1993; en su

lugar, se **condenará a su reconocimiento y pago, a partir del 27 de septiembre de 2008, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa**, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y la Sentencia SU 556 de 2019 de la H. Corte Constitucional, concordado con el **Decreto 758 de 1990**.

Prescripción y disfrute de la pensión de invalidez:

Conforme a lo indicado en el inciso final del **artículo 40 de la Ley 100 de 1993, el disfrute y causación de la pensión de invalidez, se da a partir de la fecha de estructuración de tal estado**.

Por su parte, **el artículo 3° del Decreto 917 de 1999²**, preceptuaba que mientras el afiliado recibiera subsidio por incapacidad temporal, no habría lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. Si bien es cierto, esta norma fue derogada por el Decreto 1507 de 2014; también lo es, que **el artículo 10° del Decreto 758 de 1990, contempla que el disfrute de la pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado**; anotando que cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio; sin que en el expediente obra prueba sobre pago por este concepto.

Tratándose de pensión de invalidez la prescripción empieza a correr desde cuando queda en firme la ‘determinación’ de la invalidez laboral, así lo ha precisado por

² Derogado por el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 artículos 5° y 6°

Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en las Sentencias SL4174 de 2018 y SL5703 de 2015, entre otras; sin existan mesadas pensionales afectadas –el derecho a la pensión no prescribe–, toda vez que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que le asignó el 75.5% de PCL estructurada el 27 de septiembre de 2008, fue emitido el 26 de enero de 2011 (folio 16), reclamó la pensión de invalidez el 12 de agosto de 2013 (folio 62) e interpuso demanda el día 16 de diciembre del mismo año (folio 1); sin que en ese lapso transcurrieran tres (3) años, conforme a lo señalado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Por tanto, **se reconocerá el disfrute de la pensión de invalidez, a partir del día 27 de septiembre de 2008.**

Valor y número de mesadas:

Atendiendo al ingreso base de cotización reportado por el afiliado en la historia laboral, se reconocerá la mesada pensional en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **14 mesadas** al año, por haberse causado antes del 31 de julio de 2011, conforme al Parágrafo Transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Retroactivo pensional:

Efectuado el cálculo correspondiente, COLPENSIONES adeuda al demandante la suma de **\$131.908.862** por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el **28 de septiembre de 2008** hasta el **31 de julio de 2022**, ambas fechas inclusive, con derecho a 14 mesadas al año.

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	No mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2008	4 mesadas y 3 días	\$ 461.500	\$ 1.892.150
2009	14	\$ 496.900	\$ 6.956.600
2010	14	\$ 515.000	\$ 7.210.000
2011	14	\$ 535.600	\$ 7.498.400
2012	14	\$ 566.700	\$ 7.933.800
2013	14	\$ 589.500	\$ 8.253.000
2014	14	\$ 616.000	\$ 8.624.000
2015	14	\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022	8	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000
		TOTAL	\$ 132.908.862

A partir del **1° de agosto de 2022**, COLPENSIONES continuará reconociendo y pagando la pensión de invalidez al demandante, mientras persistan las causas que le dieron origen, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **14 mesadas** al año, sin perjuicio de los incrementos legales.

El apoderado del demandante solicita se imponga condena por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993:

No siendo procedente el reconocimiento de intereses moratorios, teniendo en cuenta que en su momento, COLPENSIONES negó la prestación económica conforme a lo preceptuado en la normatividad aplicable al caso concreto y en este proceso, se reconoce la prestación conforme a jurisprudencia de la H. Corte Constitucional (mas no de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que tiene otro criterio

sobre el tema); en tales situaciones, esta última Corporación, ha precisado que no procede condena por intereses moratorios, cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la Ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los Jueces, en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir. Al respecto ver, entre otras, Sentencias SL12018 de 2016 Radicado 65746, SL10504 de 2014 Radicado 46826, SL16390 de 2015 Radicado 40868.

Por lo anterior, se **confirmará** la decisión de Primera Instancia en cuanto absolvió de la pretensión de intereses moratorios y condenó en su lugar, al reconocimiento y pago de la indexación sobre las mesadas pensionales reconocidas, causada desde la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la obligación.

Descuentos en salud:

Se autorizará a COLPENSIONES a descontar del valor del retroactivo pensional reconocido, las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 42 inciso 3° del Decreto 692 de 1994 y previsiones del artículo 69 del Decreto 2353 de 2015, lo indicado por la **H. Corte Constitucional en la Sentencia SU 230 de 2015** y reiterados pronunciamientos de la **Sala de Casación**

Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, entre otras, Sentencias **SL1338 de 2020 Radicado 64254, SL522 de 2018 Radicado 66940 y SL7911 de 2015 Radicado 5757**, en las que ha precisado que una vez surge el status de pensionado, por ministerio de la Ley surge la obligatoriedad de las entidades pagadoras de pensiones de descontar la cotización para el sistema de salud.

COSTAS:

En consulta en favor de COLPENSIONES, se revocará la condena en costas de Primera instancia, teniendo en cuenta que, si bien la entidad fue vencida en juicio, la negativa de la pensión de invalidez obedeció a la aplicación de la normatividad legal aplicable para la fecha de estructuración de la invalidez. **No se condenará en Costas en Segunda Instancia**, al haber prosperado el recurso de apelación formulado por la apoderada del demandante, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **MODIFICA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas que por vía de Apelación se revisa, **REVOCÁNDOSE** en cuanto condenó al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 19 de julio de 1999, en aplicación del artículo 39 original de la Ley 100 de 1993; en su lugar, se **CONDENA a COLPENSIONES a su reconocimiento y pago, a partir del 27 de septiembre de 2008, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa**, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y la Sentencia SU 556 de 2019 de la H. Corte Constitucional, concordado con el **Decreto 758 de 1990**, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **14 mesadas al año**, mientras persistan las causas que le dieron origen y sin perjuicio de los incrementos legales; en consecuencia, se **CONDENA a COLPENSIONES**, a reconocer y pagar al demandante:

a) La suma de **\$132.908.862** por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el **27 de septiembre de 2008** hasta el **31 de julio de 2022**, ambas fechas inclusive;

b) A partir del **1º de agosto de 2022**, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la demandante la pensión de invalidez, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **14 mesadas al año**, sin perjuicio de los incrementos legales;

c) Se **AUTORIZA a COLPENSIONES a descontar** del retroactivo pensional reconocido, **las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales**; conforme a lo expresado en las consideraciones.

Todo lo anterior de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia en lo demás, según los considerandos.

TERCERO: Sin condena en Costas en Primera ni en Segunda Instancia, de acuerdo lo indicado en la parte motiva.

CUARTO: Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

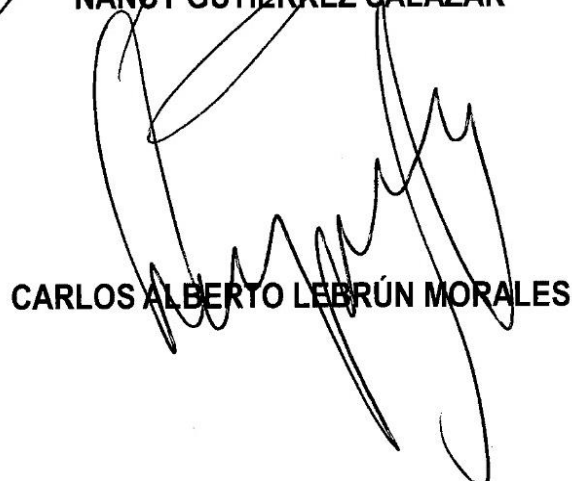
Los Magistrados,



MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **PASTOR CAICEDO MURILLO**
Demandados : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.**
Radicado : **05001 31 05 019 2013 01540 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común -.
Decisión : Modifica decisión condenatoria de Primera Instancia
Sentencia No : 158

FECHA SENTENCIA:

12 de agosto de 2022

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy miércoles 17 de agosto de 2022 a las 8:00 Am Desfijado hoy miércoles 17 de agosto de 2022 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO